

Medios de Comunicación, Sociedad e Instituciones Políticas: Algunos Patrones de Interdependencia y de Conflicto.

Dr. Herbert Koeneke R. ()*

Resumen

En este trabajo se analizan, a la luz de hallazgos de investigaciones recientes en el área de la comunicación política, algunos patrones de interacción entre los medios y distintos actores sociales y políticos. El énfasis de esta investigación es en torno al caso venezolano, del cual se establecen diversas evidencias empíricas que contradicen creencias arraigadas entre el público general y aun entre ciertos especialistas en relación con la compleja red de interacciones entre los medios de comunicación y los procesos sociopolíticos.

Abstract: Mass Media, Society and Political Organizations: Some Patterns of Interdependency and Conflict.

This article shows, based on research findings in the political communication area, some patterns of interaction among media, society and politics. It emphasizes on the Venezuelan case, from which different empirical evidences, contrary to public and specialists beliefs, related to the net of interactions between media and socio-political processes are established.

I.- Introducción

En este trabajo se abordan dos temas diferentes, aunque estrechamente relacionados: 1) el poder de los medios de comunicación social (MCS) como "perro guardián" de una sociedad democrática, y 2) el papel de los medios como enlaces entre las instituciones políticas de una democracia y el público, según las perspectivas de políticos y comunicadores.

Al hablar de los MCS como el "perro guardián" de la sociedad, se entiende que esos medios actúan en defensa del interés colectivo a través de sus funciones de informar, educar, persuadir y entretenir. Cuando la defensa de los intereses sociales está referida al ámbito político, nos aproximamos entonces a la vieja noción de la prensa como "cuarto poder", enunciada ya en el siglo XVIII (Bobbio y Matteucci).

La actuación de los MCS como "perro guardián" de una sociedad democrática será analizada desde la perspectiva de tres procesos diferentes: el proceso de socialización política, el proceso de relaciones e interacciones entre MCS y políticos y gobernantes, y el proceso de creación de las agendas de discusión y de acción públicas ("agenda setting").

La segunda parte de la ponencia se orientará a analizar, desde la perspectiva de políticos y gobernantes, por un lado, y de comunicadores, por el otro, cómo se concibe el papel de los MCS como intermediarios entre las instituciones políticas y los ciudadanos. Trataré de evitar caer en contrastaciones simplistas de tipo puramente motivacional, para analizar varias tesis que son relevantes en la comprensión de la función de enlace de los MCS: 1) la tesis del "efecto culatazo" ("recoil effect") de la creación de aparatos de información y relaciones públicas por los regímenes democráticos, 2) la tesis de que la aceptación o apoyo público al gobierno depende de cuán bien éste diseña y ejecuta sus políticas de comunicación, 3) la tesis de que los MCS desatan a menudo "guerras sucias" en contra del gobierno con fines esencialmente egoístas, y 4) la tesis de que los MCS invaden con frecuencia la privacidad de los hombres públicos con la finalidad de escandalizar y hacer dinero. Al igual que en la primera parte del trabajo, en ésta se presentarán ejemplos tanto venezolanos como foráneos para tratar de ilustrar la validez de las tesis analizadas.

II.- Los MCS como "perro guardián" de la sociedad

II.1. Los MCS y la socialización política

La socialización política es un proceso ininterrumpido de enseñanza y aprendizaje a través del cual los miembros de una sociedad desarrollan su identidad política y se adaptan a su entorno político. Este es un proceso que se inicia muy temprano en la vida de las personas y que concluye sólo con su muerte, puesto que permanentemente todos estamos expuestos a la influencia de los agentes de la socialización. Los más importantes de dichos agentes son la familia, la escuela, los grupos de pares y los MCS. (Dawson et al).

Desde el momento en que Herbert Hyman sistematizó los estudios empíricos de la socialización política en 1959, la familia tendió a ser considerada normalmente como el principal agente del proceso, aunque ocasionalmente se le confirió esa primacía a la escuela (Hess y Torney). A los MCS, en contraste, se les veía usualmente como agentes secundarios, con un impacto esencialmente reforzador de las orientaciones políticas adquiridas en el seno de la familia o la escuela, así como con un impacto formador de creencias y orientaciones hacia objetos políticos transitorios durante la adolescencia y la vida adulta.

Esa perspectiva ha cambiado sustancialmente a partir de la década de los noventa. A la familia, ciertamente, se le sigue considerando como el principal agente en la formación de las orientaciones políticas más generales, tales como sentimientos patrióticos, identificación con un régimen y simpatía por un partido político. A los MCS, sin embargo, se les ve ahora como agentes de primer orden, capaces de formar orientaciones políticas generales entre niños y adolescentes. La presencia ubicua de la televisión y la mejoría en las técnicas de investigación social¹ han evidenciado una influencia significativa de ese medio en la formación de actitudes básicas, entre los jóvenes, hacia la autoridad, la propiedad y la veneración por los símbolos políticos. (Graber: 204).

De hecho, ya en los años setenta, en plena crisis política generada por el escándalo Watergate—seguido mayoritariamente a través de la TV—diversas investigaciones sugirieron que los MCS tenían un impacto significativo sobre las orientaciones políticas de los jóvenes. Así, una de ellas encontró que las evaluaciones del Presidente, en términos de la preocupación de éste por el ciudadano común, se habían hecho sensiblemente menos favorables entre los niños y

1 En las investigaciones iniciales sobre el papel socializador de los MCS sólo se consideraban sus influencias directas sobre los niños, es decir, sin tomar en cuenta el impacto indirecto ejercido a través de otros agentes socializadores como la familia y el maestro. Sin embargo, mucho de lo que éstos transmiten a los jóvenes proviene de los MCS. Adicionalmente, la exposición directa al medio televisivo ha alcanzado niveles muy elevados. Doris Graber reporta que, durante el invierno, los niños estadounidenses de entre 2 y 11 años dedican en promedio 31 horas a la semana a ver TV. Este patrón de uso tiene sus repercusiones: “Al comparar los jóvenes que utilizan asiduamente los medios masivos con los que lo hacen menos intensamente se encuentra que los primeros obtienen información sustancial de los medios y expresan mayor comprensión y apoyo a valores norteamericanos básicos como la importancia de la libertad de expresión y el derecho a un tratamiento justo e igualitario” (Graber: 205).

jóvenes del período post-Watergate al ser comparadas con las de los niños y jóvenes de los años 1961-1962. Este deterioro en la evaluación presidencial se manifestó más claramente entre los niños mayores de once años que entre los de menor edad. (Dawson et al: 65).

Con respecto a la socialización política de los adultos, es claro que una parte muy significativa de lo que éstos aprenden proviene de los MCS. Y este aprendizaje tiene muy a menudo carácter incidental o no intencional, esto es, no es promovido en forma deliberada por los medios y los comunicadores, quienes simplemente se sienten obligados a cumplir con su deber de informar sobre lo que acontece en el mundo político o simplemente a transmitir programas de entretenimiento, que pueden tener repercusiones políticas. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje fue el provocado por las declaraciones del Vice-Presidente estadounidense Dan Quayle sobre la preñez y alumbramiento del personaje televisivo Murphy Brown. Hablando ante una audiencia en San Francisco, en mayo de 1992, poco después de los sangrientos motines de ese año en la ciudad de Los Angeles, Quayle atribuyó el origen de los mismos, en parte, a una "pobreza de valores", manifiesta, según él, entre otras formas, en la extendida aceptación de la maternidad fuera del matrimonio. La alusión al personaje de la comedia, la madre soltera Murphy Brown, fue directa y explícita, lo que generó numerosos comentarios críticos hacia el Vice-Presidente en los MCS. La polémica se acentuó luego de que Quayle declaró públicamente que las críticas a su posición revelaban una "guerra entre los valores tradicionales y una élite cultural que se burla de la familia, de la religión y del patriotismo" (Crotty:1).

Estas infortunadas declaraciones del Vice-Presidente Quayle, en las que atribuía a Murphy Brown responsabilidades por la quiebra de los valores familiares y a esta quiebra la responsabilidad por los motines y saqueos de Los Angeles, respondieron aparentemente a una estrategia electoral del comando de campaña Bush-Quayle, que trataba desesperadamente de encontrar "issues" o temas que restauraran la confianza de los norteamericanos en el equipo gubernamental que buscaba la reelección (Crotty: 13). La estrategia, sin embargo, tuvo "efecto boomerang". En el episodio de la comedia correspondiente al 22 de septiembre de 1992, Murphy Brown refutó a Quayle en cuanto a que ella estuviese amenazando los valores familiares. Una audiencia récord de 44 millones de personas vio el programa y las cartas del público recibidas con posterioridad fueron abrumadoramente favorables a la posición expresada por Brown (Davis: 131). Después de todo, ella hubiese podido practicarse un aborto y no lo hizo, lo que

entraña un "valor familiar"². En noviembre de ese año, el dúo Bush-Quayle fue derrotado por los candidatos del Partido Demócrata, Bill Clinton y Al Gore.

En términos del proceso de socialización política, el ejemplo analizado revela cómo un personaje de la ficción televisiva, al ser utilizado con fines proselitistas por un líder político, puede generar aprendizajes y toma de posiciones entre los miembros de un público, que quizás de otra manera nunca se hubieran producido o lo hubieran hecho de manera mucho más limitada. En cuanto a la polémica desatada por las declaraciones de Quayle, y a la cobertura y seguimiento de las mismas por los MCS, resulta clara que éstos desempeñaron su rol de "perro guardián" de la sociedad: facilitando tanto la discusión de temas de interés para el conglomerado social como la definición de opciones personales con repercusiones políticas ("pro-vida" o anti-aborto y "pro-libertad de escogencia" o favorable al aborto).

En el contexto venezolano algunas investigaciones han revelado un impacto o influencia de los MCS en el aprendizaje político de los ciudadanos. Así, un estudio realizado en 1965 con estudiantes de 6^a grado de educación primaria concluyó que la programación televisiva era el principal responsable en la formación de estereotipos étnicos y nacionales entre los niños. En esa investigación se comparó la preferencia entre los jóvenes por ciertos programas de TV ("El Zorro", "Combate", "El Fugitivo") con sus respuestas acerca de la nacionalidad de los "buenos" y de los "malos", el color de su piel, el origen lingüístico de sus nombres, etc. La conclusión del estudio es que la TV genera estereotipos en los niños, para quienes los "buenos" provienen mayoritariamente de los Estados Unidos, son blancos, ricos, profesionales y con nombres

2 El propio vocero de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, como lo señala Doris Graber, había zigzagueado en un mismo día sobre el episodio: en la mañana condenó a Murphy Brown por promover los hijos fuera del matrimonio; en la tarde la alabó por no haberse practicado un aborto. (Graber: 201). El interés electoral de las declaraciones de Quayle se hace evidente al considerar las estadísticas siguientes: 1) las familias de padres solteros en los Estados Unidos superan el 33% del total y su número venía aumentando desde mucho antes del show de Murphy Brown (Davis: 131); 2) en los "ghettos" de las grandes ciudades norteamericanas -donde se originaron los motines de Los Angeles- la proporción de madres solteras es cercana al 80%; y 3) pese a que "Murphy Brown" ocupaba el tercer lugar de sintonía nacionalmente, se ubicaba en cambio en el puesto número 56 de popularidad entre las mujeres de los "ghettos" cuando Quayle hizo sus declaraciones públicas. (Crotty: 2).

ingleses. Los "malos", por su parte, provienen de Alemania y China, son negros (sic), pobres, no profesionales y con nombres tanto ingleses como hispanos (Santoro: 262).³

Para la época en que se realizó esta investigación —que no se basó en muestras probabilísticas de la población estudiantil del país— el avance del comunismo en el mundo parecía indetenible. Cuatro años antes, Castro había derrotado la invasión de exiliados cubanos en Bahía de Cochinos y la "Primavera de Praga" se hallaba a tres años de distancia. En Venezuela, la guerrilla se encontraba en pleno apogeo y las universidades públicas constituyan auténticos hervideros del pensamiento marxista. En este contexto, preguntarse acerca del impacto de la programación televisiva sobre el apoyo a la democracia constituía una posibilidad muy remota. En retrospecto, sin embargo, no resulta descabellado plantearse si esa programación aparentemente generadora de estereotipos étnicos y raciales no promovía al mismo tiempo la identificación del joven venezolano con la democracia. Porque si los "buenos" eran abrumadoramente norteamericanos y los "malos" mayoritariamente alemanes y "chinos", en un contexto en el cual telenovelas como "Combate" eran de las preferidas, cabe preguntarse si la lucha de la democracia contra el autoritarismo nazi y nipón escenificada en el programa pudo contribuir a reforzar el apoyo mayoritario que el venezolano ha manifestado inveteradamente hacia la democracia.

Esa pregunta debe quedar con una simple hipótesis o sugerencia. En cambio, resulta plenamente verificable que los venezolanos han apoyado sustancialmente a la democracia como forma ideal de gobierno durante las tres últimas décadas. La Tabla 1 es clara al respecto.

¿Por qué se mantiene ese alto apoyo a la democracia en medio de tantas privaciones y rechazo a liderazgos e instituciones políticas concretas? La respuesta no es difícil de encontrar si nos atenemos a la evidencia internacional sobre el proceso de socialización política: las orientaciones políticas básicas, forjadas generalmente durante la niñez, tienden a persistir hasta la vida adulta y a ser relativamente inmunes a los vaivenes de la política y la economía. Así las

3. Este estudio se enmarca dentro de una tradición investigativa sobre la identidad y la autovalorización nacional. El hallazgo reiterado es que el venezolano posee una autoimagen nacional negativa, de minusvalía. Las causas de la misma han sido atribuidas a los programas escolares de historia vigentes desde mucho antes del advenimiento de la televisión (Quintero); a los libros y escritos de los principales intelectuales del país desde finales del siglo XIX (Montero); y a la TV, que llegó al país en 1952 (Santoro).

cosas, pese a las evaluaciones negativas de los gobiernos de turno, afincadas en un desempeño pobre que dejó expectativas insatisfechas, los venezolanos siguen pensando que la democracia es preferible, con todas sus limitaciones, a otras formas de gobierno. De allí el escaso apoyo a los alzamientos militares de 1992, los cuales, en la errónea creencia de distintos comentaristas, habrían generado un amplio sentimiento de adhesión popular.⁴ Las cifras obtenidas por la empresa Datos y presentadas en las Tablas II y III revelan lo equivocado de esa percepción.

En fin, gracias a la influencia de agentes como la familia, la escuela y los MCS, los venezolanos continúan brindando su apoyo mayoritario a la democracia y rechazando salidas extrademocráticas. La opción candidatural de Hugo Chávez Frías para las elecciones presidenciales de 1998 no constituye una ruptura de ese apoyo: los ciudadanos continúan prefiriendo el régimen democrático a cualquier otro, aunque, como también lo vienen manifestando desde hace años, desean mano dura para acabar con la delincuencia y con la corrupción. Chávez ha logrado capitalizar esa aspiración al orden con un discurso maniqueo y retaliativo que persigue polarizar a la sociedad. El riesgo de esta estrategia en términos de una violencia colectiva potencial es innegable.

4 Es probable que este error derive del hecho de que el Teniente-Coronel Hugo Chávez Frías, líder del MBR-200 y responsable de las operaciones militares en Caracas durante el alzamiento del 4 de febrero de 1992, se convirtió en una celebridad instantánea al ser entrevistado muy brevemente para la TV a raíz de su detención. La verdad, sin embargo, es que la actitud o inclinación militarista del venezolano es minoritaria y ha venido, aparentemente, declinando. En 1971, por ejemplo, el estudio Pulso Nacional de Datos indagó sobre quién sería un mejor Presidente para Venezuela. Pese a que la guerrilla aún no había sido pacificada totalmente y, por eso mismo, los militares tenían alta visibilidad y prestigio como garantes de la libertad, sólo 35% de los encuestados señaló que el mejor Presidente sería un militar. Dos años más tarde, esa misma empresa investigó qué papel, según los venezolanos, debían desempeñar las Fuerzas Armadas en la vida nacional. Doce por ciento señaló que deberían intervenir en política en cualquier momento en que lo consideraran necesario y 18% dijo que debían actuar cuando la Constitución fuese violada. En contraste, 31% afirmó que siempre deberían respetar al gobierno instituido y 35% que deberían respetar la voluntad popular aún cuando el régimen no satisficiera las aspiraciones populares. En marzo de 1992, un mes después del alzamiento del 4 de febrero, Datos constató que sólo 12% preferían un gobierno militar a una democracia civil. En diciembre de ese mismo año, días después del alzamiento del 27 de noviembre, otro estudio de la misma empresa encontró que 9% de los encuestados estaban fuertemente a favor del golpe, 13% algo en favor y 76% en contra (Templeton).

II.2. Las relaciones de los MCS con los políticos y gobernantes

Es un hecho harto conocido que entre los MCS y los políticos y gobernantes de una democracia existen relaciones de dependencia recíproca. Para los medios, los líderes y gobernantes representan importantes fuentes de información política. Para los políticos y gobernantes, a su vez, los medios constituyen instrumentos imprescindibles para darse a conocer personalmente, para divulgar sus puntos de vista e incluso para rendir cuenta pública de su gestión como gobernantes.

Esta relación de clara interdependencia no se traduce siempre, sin embargo, en una interacción armónica entre las partes. Por el contrario, los conflictos y las inculpaciones recíprocas se producen con mucha frecuencia. Son dos los factores que se hallan detrás de esa dinámica: por una parte, el llamado "costo político" y, por la otra, el propio rol de "perro guardián" de la sociedad que asumen los MCS. El "costo político" no es otra cosa, como su nombre lo sugiere, que el precio en apoyo o simpatía pública que un político o gobernante debe cancelar al tomar una decisión impopular o al dejar ver sus carencias o debilidades como persona o como líder. Por su parte, el papel de "perro guardián" entraña, como se dijo, la búsqueda, obtención y divulgación de datos e informaciones que contribuyan al bienestar de la sociedad. El interés de los políticos y gobernantes en minimizar el costo político de sus actuaciones choca

a menudo, como se podría esperar, con las investigaciones e informaciones que los medios producen en cumplimiento de su función veedora del interés social. Aquí radica la génesis de las relaciones conflictivas entre medios y políticos, subyacente a la cual se encuentra una visión suma-cero del producto de la información política.

Tabla I
Apoyo Difuso al Sistema Demócratico

¿ Cuál es el mejor sistema político para Venezuela ?

| AÑO | DEMOCRÁTICO (%) | OTROS (%) | NS / NC (%) | ENCUESTADORA / PATROCINANTE |
|--------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 1963 | 69 | 23 | 8 | IFEDEC |
| 1980 | 69 | 28 | 3 | GALLUP |
| 1983* | 82 | 10 | 8 | VENEDEMO |
| 1990 | 69 | 21 | 11 | CONSULTORES 21 |
| 1996** | 60 | 39 | - | CONSULTORES 21/PENSAMIENTO Y ACCIÓN |
| 1996 | 84 | 16 | - | DOXA / ISR |

Fuente: Romero (1995), Baloyra (1986), Doxa (1996)

* LA ALTERNATIVA NO ERA DEMOCRACIA VS OTROS, SINO DEMOCRACIA VS DICTADURA

** LA ALTERNATIVA ERA "DEMOCRACIA ES PREFERIBLE A CUALQUIER OTRO TIPO DE GOBIERNO" VS "DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS".

TABLA II

**Los venezolanos y sus preferencias por gobierno civiles y militares a raíz del
alzamiento del 4 de febrero de 1992**

| PREFERENCIAS | (BASE: 2.000) |
|--|---------------|
| | % |
| Prefiere el actual sistema de gobierno | 63 |
| Prefería un gobierno militar | 26 |
| Ninguno/No contestó | 11 |
| Pregunta adicional a los no prefieren el gobierno actual (N= 736) | |
| Un gobierno militar | 32 |
| El actual sistema reformado | 56 |
| Ninguno/No contestó | 12 |

Fuente: Pulso Nacional, Marzo 1992 (Templeton, 1995)

TABLA III

Apoyo al alzamiento militar del 27 de noviembre de 1992

| APOYO | (BASE: 654) | |
|---------------|-------------|---|
| | | % |
| Muy en favor | + 9 | |
| Algo en favor | 13 | |
| En contra | 76 | |
| No contestó | 2 | |

Fuente: Datos, 2 - 4 de Diciembre, 1992 (Templeton)

En el plano internacional, quizás el caso más conocido de enfrentamiento entre unos MCS y un gobierno fue "Watergate". Desde el 17 de junio de 1972, cuando cinco "plomeros" o espías vinculados con el Comité para Reeleger al Presidente (CREEP) fueron apresados por realizar espionaje en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate de Washington D.C., hasta el 8 de agosto de 1974, cuando Richard Nixon se vio forzado a renunciar a la Presidencia de los Estados Unidos, la prensa de ese país investigó y denunció de tal manera a la administración Nixon, que permitió conocer en forma progresiva y pública las vinculaciones de los altos funcionarios gubernamentales con el "affaire", incluido el propio Presidente. Especialmente dos reporteros investigativos del *Washington Post*, Carl Bernstein y Bob Woodward, fueron protagonistas de primera línea en este caso clásico de ejercicio de la función massmediática de "perro guardián" de la sociedad.

No siempre el ejercicio de esa función implica, obviamente, las dimensiones de "Watergate" en términos de sus implicaciones político-constitucionales, de los actores envueltos y de su duración. Lo usual es que la investigación y la información de los MCS se refiera a aspectos limitados de la coyuntura política. Por ejemplo, a mediados de 1987, *The New York Times* envió a catorce precandidatos presidenciales norteamericanos un cuestionario-petitorio en el que les solicitaba información rutinaria como el certificado de nacimiento, información médica-psiquiátrica y un certificado de antecedentes penales-policiales de los archivos del FBI. Algunos de los aspirantes presidenciales suministraron la información solicitada, pero otros no lo hicieron. Entre estos últimos, el precandidato republicano Pat Roberson, por citar un caso, se negó a suministrarla con el alegato de que no buscaba empleo en el *New York Times* (Zuckerman: 45).

En Venezuela, un año más tarde, el periodista y diputado Oscar Yanes propuso la realización de pruebas anti-doping a los candidatos presidenciales a la elección de 1988. La propuesta no prosperó y uno de los candidatos, el del MAS-MIR, Teodoro Petkoff, la calificó de una grosería, "donde no hay dudas de que se observan mentes atrapadas en la guerra sucia" (Urdaneta: 6).

Antes de concluir esta sección, conviene señalar que en este país sí ha habido casos de la envergadura de "Watergate". En el llamado "escándalo de los 250 millones de la partida secreta", que culminó con la remoción, enjuiciamiento y condena del Presidente Carlos Andrés Pérez, los MCS desempeñaron un papel fundamental. En primer lugar, fue un periodista, José Vicente Rangel, quien hizo la denuncia pública el 8 de noviembre de 1992, de un uso presuntamente irregular de Bs. 250 millones de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Y en segundo lugar, algunos MCS habían sido críticos tan acerbos de la gestión de Carlos Andrés Pérez, desde antes del caso de la partida secreta, que probablemente contribuyeron al debilitamiento de su posición en la estima pública –ya de por sí maltrecha por el descontento popular–, lo cual contribuyó a su vez al logro de un acuerdo político para removerlo de su cargo y enjuiciarlo (Rodríguez; Sanchis). Para el segundo trimestre de 1993, cuando se produjo su suspensión temporal de la Presidencia, el índice neto de agrado de Carlos Andrés Pérez entre la población era de -50 (20% de agrado, 70% de desagrado). En contraste, el índice de favorabilidad hacia los MCS era de +26 (61% evaluación positiva, 35% negativa) (Sanchis: 77, 83).

El 30 de mayo de 1996, el ex-Presidente fue sentenciado a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario por malversación genérica agravada.

III.3: El proceso de creación de la agenda de discusión y de acción pública ("agenda setting")

La creación de la agenda se refiere a un proceso de interacciones e influencias comunicacionales reciprocas entre los MCS, los ciudadanos y los gobernantes -cada uno de ellos influenciado a la vez por sus entornos particulares- que puede concluir en una decisión pública de burócratas o gobernantes: hacer algo, dejar de hacer algo o no hacer nada.⁵

En este proceso están envueltas, en realidad, tres agendas diferentes: la mediática, la pública y la de los decisores públicos. La agenda mediática se refiere a los temas que los MCS privilegian en su trabajo diario, principalmente en la forma de noticias y de opiniones. La agenda pública se refiere, por su parte, a los temas que los ciudadanos consideran como de mayor importancia o jerarquía en un momento determinado. La de los decisores públicos o "agenda formal", finalmente, se refiere a aquellos temas o asuntos que son atendidos y considerados por los decisores públicos y que pueden llevar a la formulación de una política pública o bien a la decisión de dejar las cosas como están (Manheim y Albritton).

Entre los tres tipos de agenda no cabe esperar siempre una exacta correspondencia. Es indudable que entre los MCS, el público y los gobernantes existen relaciones de interdependencia, pero también es innegable que cada uno de esos entes posee intereses distintivos o especiales, realiza transacciones con otros actores diferentes a los de la triada y recibe influencias de sus entornos particulares. Lo razonable, por lo tanto, es esperar que haya fluctuaciones en la similitud de las tres agendas: resulta probable, por ejemplo, que en períodos de crisis las semejanzas se incrementen y que disminuyan en períodos de sosiego o normalidad.

⁵ No siempre el proceso concluye en una toma de decisión por los gobernantes y no siempre las decisiones de los gobernantes obedecen a la influencia de las agendas mediática y pública. En el primer caso, los decisores públicos pueden ignorar altamente o involuntariamente los temas de las agendas mediática y pública; en el segundo, la decisión tomada puede obedecer a motivaciones personales del decisor o bien a la influencia de actores o entes distintos a los MCS y el público.

Con respecto a la formación de la agencia pública, los estudios realizados a partir de la investigación pionera de McCombs y Shaw de finales de los años sesenta han reiterado, una y otra vez, el papel decisivo que juegan los MCS en la jerarquización que hacen los ciudadanos de los principales temas o problemas que se divultan en un momento determinado. Independientemente del diseño de investigación utilizado (experimental, cuasi-experimental) y de las técnicas de recolección y análisis de datos empleadas, la conclusión ha tendido a ser similar: la agencia pública se halla fuertemente influenciada por la agenda de los MCS.

Antes de proseguir, considero conveniente hacer algunas precisiones en torno a la influencia mediática mencionada. En primer lugar, el impacto es fundamentalmente de tipo cognoscitivo y no de tipo actitudinal: en las muy citadas palabras de Bernard Cohen, los MCS pueden no ser muy exitosos en decirles a la gente cómo pensar, pero si lo son en decirles sobre qué pensar (Weaver: 37). En segundo término, el impacto de los MCS tiende a ser elevado en temas con los cuales el público tiene o ha tenido pocas vivencias o contactos personales (p. ej.: política exterior, controversias militares, escándalos de corrupción), pero bajo en aquellos temas que lo afectan en su vida cotidiana (p.ej.: inflación) (Weaver: 38; Iyengar y Kinder: 19). Y en tercer lugar, la agenda pública es no sólo producto de la influencia de los medios, sino también de otras influencias como la del Presidente de la República (p. ej.: en los temas energéticos e inflacionario en los EEUU durante el período 1974-1980) o como la influencia del propio entorno general, es decir, las condiciones macroeconómicas y sociales (p. ej.: en el caso del desempleo en EEUU entre 1974 y 1980) (Iyengar y Kinder: 26-33).

En cuanto al impacto de las agendas mediática y pública sobre la agenda de los decisores públicos, son varias las vías o caminos a través de las cuales el mismo se puede producir. En primer lugar, al enfatizar ciertos temas en lugar de otros, es claro que los MCS contribuyen no sólo a que los miembros del gran público establezcan jerarquías en los asuntos o problemas colectivos (agenda pública) sino que esos mensajes alcanzan también a los gobernantes o decisores públicos. Estos, de esa manera, se enteran del "menú" temático de los MCS en un momento determinado, así como de las prioridades que los ciudadanos probablemente establecen con respecto a esos temas. La toma de decisiones sobre los mismos estará sujeta, desde luego, a distintas influencias, entre las que figuran la presión continua que puedan ejercer

los propios medios sobre el gobierno y la urgencia o vehemencia con que las demandas o expectativas de los ciudadanos sean articuladas.

Una segunda influencia de las agendas mediática y pública sobre la agenda formal es la producida por el llamado "efecto imprimación" o "efecto de teñido". Los MCS, como lo señalan Iyengar y Kinder, al enfatizar ciertos temas e ignorar otros, no solamente condicionan a los miembros del público en la jerarquización que hacen de los principales asuntos o problemas, sino que adicionalmente los proveen de estándares para evaluar a un presidente, un gobierno o una política pública. Como lo indican esos autores, la mayoría de los seres humanos utilizan normalmente, al hacer evaluaciones, un monto limitado de información, lo que tiende a traducirse, en el lenguaje de la teoría decisional, en resultados satisfactorios pero no óptimos. Las evaluaciones de políticos y gobernantes no escapan por lo general de esa tendencia: los ciudadanos no recurren normalmente a exámenes exhaustivos—para lo cual, por lo demás, pocas veces están preparados o informados—sino que por lo regular apelan a lo primero que les viene a la mente. Y esto, muy a menudo, es lo que los MCS han divulgado en fechas recientes.

Diversas investigaciones realizadas en los Estados Unidos confirman esa tendencia. Por ejemplo, las personas que vieron noticiarios televisivos en los que se incluyeron informaciones sobre la defensa nacional y el manejo de la inflación por el Presidente Jimmy Carter tendieron significativamente más que las personas que no los vieron a evaluar la gestión general del Presidente con base en su desempeño en dichas áreas. En otras palabras, las evaluaciones sobre algunas ejecutorias sectoriales del Presidente, destacadas por la TV, tendieron a tener las evaluaciones sobre su desempeño global (Iyengar y Kinder: 65-69).

Dada esta influencia de los MCS sobre las evaluaciones que hace el público de los gobernantes, no es de extrañar que éstos sigan muy de cerca la agenda mediática para tratar de neutralizar las evaluaciones negativas sobre ellos y para reforzar los mensajes promotores de las evaluaciones positivas. Con lo cual se pone en evidencia la influencia de esa agenda sobre la formal.

En el caso de Venezuela, no he podido encontrar investigaciones con diseños experimentales o cuasi-experimentales que analicen en forma rigurosa el proceso de formación de la agenda. Existen, sí, datos recabados de manera autónoma o independiente que pueden ser ensamblados

para asomarse a algunos ejemplos de ese proceso. Aquí me referiré al caso del estallido social de los días 27 y 28 de febrero de 1989, también conocido como "El Caracazo", sobre el cual un autor (Alvarez) analizó las versiones noticiosas ofrecidas por los seis diarios nacionales de mayor circulación (*El Diario de Caracas, El Nacional, El Mundo, Últimas Noticias, El Universal* y *2001*). En su investigación, el autor determinó cómo los medios definieron los sucesos, cómo explicaron sus causas o motivos, quiénes fueron sus protagonistas y cuál fue la ubicación geográfica o extensión de los hechos. Otros dos autores (Torres y Codetta), utilizando datos de una encuesta "flash" realizada en el Área Metropolitana de Caracas un mes después de los sucesos, analizaron las opiniones de los caraqueños sobre estos hechos. La comparación de ambos tipos de datos puede darnos indicios sobre el probable impacto de la agenda mediática sobre la agenda pública.

En la Tabla IV se presenta la jerarquización hecha tanto por los medios impresos como por los encuestados de los culpables o destinatarios de la protesta violenta. En la Tabla V se recogen, por su parte, las respectivas jerarquizaciones sobre los motivos o causas de la protesta.

Aunque en ninguno de los casos los rangos resultan iguales, creo que se puede afirmar que las opiniones recogidas en la encuesta reflejan en buena medida las versiones que la prensa ofreció de los sucesos. En primer lugar, el 70,8% de los entrevistados atribuyó al gobierno la responsabilidad por las protestas. Tres de los diarios, es decir, el 50% de ellos, habían atribuido también al gobierno esa responsabilidad. Para los periódicos, los transportistas/especuladores/empresarios fueron, sin embargo, los culpables o destinatarios más frecuentemente citados (66,6%) en tanto que los encuestados los ubicaron en el tercer lugar (50,6%), detrás del gobierno y de los políticos.

En cuanto a los motivos o causas de la explosión social, 31% de los entrevistados la atribuyeron a la especulación con los pasajes/alza de la gasolina (2º lugar). Todos los periódicos (100%) habían mencionado esa razón. El 60% de los miembros de la muestra identificó, por otra parte, al aumento del costo de la vida/inflación como una de las razones de los sucesos, mientras que sólo un diario (16,7%) hizo esa misma identificación.

Concluyo esta sección con una nota de cautela en cuanto al ejemplo usado para apreciar el impacto de la agenda mediática sobre la agenda pública. Es claro que lo que dijo la prensa escrita los mismos días del suceso (27 y 28 de febrero) se parece mucho a lo que dijeron de ellos

los encuestados un mes después de su ocurrencia. Ese parecido, no obstante, puede reflejar la existencia de otras influencias distintas a la de los periódicos. En primer lugar, están las propias vivencias de los entrevistados. Por ejemplo, algunos de ellos pueden haber sido residentes de Guarenas, ciudad satélite de Caracas donde se iniciaron las protestas, que sufrieron en carne propia el incremento de los precios del transporte público y que se hallaban en la capital cuando se realizó el sondeo. En segundo lugar, encontramos a la comunicación interpersonal, que fue intensa y prolongada dada la magnitud y lo inédito de la violencia colectiva. Aquí, sin embargo, debe reconocerse que los MCS constituyeron una fuente esencial para enterarse y dar de qué hablar en torno a los sucesos, que fueron experimentados sólo en esa forma vicaria por la mayoría de la población. Por último, la influencia de los medios radioeléctricos fue seguramente mucho más significativa que la de la prensa, dados los patrones de uso mediático que se conocen en Venezuela.⁶ La versión de los sucesos transmitida por estos medios, a su vez, pudo haber sido más coincidente con las opiniones de los encuestados que las versiones de la prensa.

6 Para mediados de los años ochenta, la TV era el medio más utilizado por los venezolanos para informarse de lo que sucedía en el país (55%) seguido por los periódicos (24%) y por la radio (19%). Para el estrato social E, el más pobre de la población y probablemente el más involucrado y afectado por los sucesos del 27 y 28 de febrero, la TV era igualmente el medio de información más usado aunque por debajo del promedio para el total de la muestra (45%), seguido por la radio (35%) y los periódicos (16%). Véase: Datos, *Pulso Nacional*, noviembre-diciembre 1985.

Diez años más tarde, ese patrón de uso informativo no parecía haber cambiado significativamente, al menos para la TV y los periódicos. Según el estudio *Latínobarómetro 1995*, el 53% de los venezolanos afirmó ver noticiarios de TV los siete días de la semana, en tanto que el 31% de ellos dijo leer la prensa todos los días. Véase: Doxa, *Instituto de Opinión Pública, Latínobarómetro 1995*.

TABLA IV

El estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989: Jerarquización de culpables o destinatarios

| CULPABLES / DESTINATARIOS | MEDIOS | | ENCUESTADOS (1) | |
|--|--------|------------|-----------------|------------|
| | Rango | Porcentaje | Rango | Porcentaje |
| Transportistas/especuladores/empresarios (2) | 1 | 66,6 | 3 | 50,6 |
| Gobierno Nacional | 2 | 50,0 | 1 | 70,8 |
| Políticos | - | - | 2 | 53,3 |
| Régimen (victimado por subversivos) | 3 | 16,67 | - | - |
| La gente | - | - | 4 | 18,3 |

Fuente: Álvarez

Datanálisis: Encuesta "flash" realizada en Caracas, 30 - 31 de marzo, 1989 (N = 400)

1 Se utilizó la siguiente pregunta cerrada: ¿Y quiénes cree Ud. que fueron los culpables de esta protesta: la gente, el gobierno, los políticos, o los comerciantes y empresarios? ¿Y en segundo lugar? Los porcentajes son la suma de ambas menciones.

2 En las categorías de la investigación del profesor Angel Alvarez no se incluye el término "empresario". Lo he incluido aquí porque los transportistas son objetivamente pequeños empresarios y porque son percibidos así comúnmente por el llamado "hombre de la calle"

TABLA V

El estallido social del 27 y 28 de febrero de 1989
Jerarquización de los motivos o causas

| CAUSAS | PERIÓDICOS | | ENCUESTADOS | |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Rango | Porcentaje | Rango | Porcentaje |
| Especulación con pasajes | 1 | 100 | 2 | 31 |
| Costo de la vida/alimentos | 3 | 16,67 | 1 | 60,1 |
| Descontento Popular / desigualdades | - | - | 3 | 14,8 |
| Descontento con paquete económico | 3 | 16,67 | 4 | 11,0 |
| Subversión | 3 | 16,67 | - | - |

Fuente: Alvarez

Datanálisis: Encuesta "flash" realizada en Caracas, 30 - 31 de marzo, 1989 (N=400)



III. El papel de los MCS como intermediarios entre las instituciones políticas y los ciudadanos

III.1. El "efecto culatazo" ("recoil effect") de la creación de aparatos gubernamentales de información.

En un esclarecedor trabajo sobre la creación de aparatos gubernamentales de información y relaciones públicas en Estados Unidos e Inglaterra, Lawrence Jacobs identifica como impulso inicial de esa idea, el deseo de los políticos de manipular a los ciudadanos. Durante la administración de William McKinley (1897-1901) en Estados Unidos y en los gobiernos británicos posteriores a la Primera Guerra Mundial se crearon esas organizaciones con la finalidad de sistematizar el flujo de las informaciones emanadas de las altas esferas gubernamentales que debían, de acuerdo con los intereses de esas esferas, alcanzar al público. A esta función inicial de transmisión de informaciones se sumó, a partir de la década de los treinta, la función de inteligencia o de seguimiento de la opinión pública a través de distintas técnicas de investigación social.

Aunque el desarrollo de esas oficinas gubernamentales de información no fue lineal ni parejo, para finales de los años cuarenta su existencia había sido plenamente justificada. Pero aún más importante que esta legitimación resultó el hecho de que, a pesar de su intención manipuladora inicial, los gobernantes comenzaron a sensibilizarse y a tomar en cuenta las aspiraciones y exigencias que los ciudadanos expresaban al ser consultados sobre la marcha de las cosas en sus respectivos países: en las palabras de un analista citado por Jacobs, este "efecto culatazo" terminó siendo más fuerte que el propio disparo (Jacobs: 200).

¿Por qué se produjo este efecto no buscado inicialmente por los gobernantes? Al menos en parte, como lo señala ese autor, el mismo se produjo porque los funcionarios gubernamentales debieron reconocer que "el público no era simplemente un receptáculo pasivo para ser manipulado, sino que poseía bastante poder para frustrar en forma pacífica las intenciones manipuladoras de sus representantes" (Jacobs: 208). En otras palabras, utilizando la terminología de Schramm, dado que el "modelo balístico" de la comunicación masiva constituye en el mejor

de los casos una pálida caricatura de lo que ocasionalmente sucede en la realidad, los gobernantes debieron empezar a tomar en serio las mediciones de opinión pública. En la sección siguiente ahondaremos en el tema. Veamos brevemente ahora cómo se desenvolvió en el caso de la democracia venezolana la creación del aparato de información del gobierno central.

La Oficina Central de Información (OCI), adscrita a la Presidencia de la República, fue creada en 1965 por el Presidente Raúl Leoni, quien colocó al frente de ella al periodista Simón Alberto Consalvi. El gobierno precedente, de Rómulo Betancourt (1959-1964), pese a no haber contado con esa oficina, desarrolló programas y estrategias comunicacionales que, en la opinión de un especialista (Rondón Nucete), han sido las más efectivas de la historia democrática del país. El principal asesor comunicacional del alto gobierno fue el historiador Ramón J. Velásquez, quien se desempeñaba como Secretario General de la Presidencia. El gobierno siguiente al de Leoni, el de Rafael Caldera (1969-1974), fue sin duda el más activo en materia comunicacional. Cada jueves, por espacio de una hora, se transmitía por las cuatro estaciones de televisión nacionales y por cuatro de las dieciocho estaciones de radio de la capital, el programa "Habla el Presidente", en el cual el Presidente Caldera daba respuesta a diversas preguntas de reporteros nacionales y corresponsales extranjeros.⁷ Esas preguntas, aparentemente, eran examinadas con antelación por el Jefe de Prensa de Miraflores, quien las jerarquizaba para ser respondidas según una selección de los temas hecha previamente de acuerdo con los intereses del gobierno. Esas ruedas de prensa, en una palabra, carecían de la espontaneidad que caracteriza a ese tipo de evento mediático (Alberti y Silva Armas: 2). En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1980), con el cual desapareció la OCI. La existencia de ese Ministerio se mantuvo durante la administración de Luis Herrera Campíns (1979-1984), pero el mismo fue eliminado por la administración siguiente, la de Jaime Lusinchi (1984-1989), quien decidió volver al esquema de la Oficina Central de Información (OCI). Este arreglo fue mantenido por Carlos Andrés Pérez en su accidentada segunda presidencia y también lo conserva la actual segunda administración de Rafael Caldera.

⁷ *Este altísimo perfil comunicacional del Presidente Caldera durante su primer gobierno, contrastó con el bajísimo perfil adoptado por él durante su actual segundo período como Presidente (1994-1999).*

III.2. La popularidad o apoyo al gobierno y sus políticas de comunicación

Una creencia muy extendida entre políticos y gobernantes en todas partes del mundo es la de que el apoyo popular a un gobierno está supeditado en gran medida a la calidad de sus políticas comunicacionales. En la sección precedente analizamos cómo el deseo de maximizar la adhesión de los ciudadanos a la administración de turno llevó a la creación de aparatos comunicacionales y de relaciones públicas en los gobiernos norteamericano y británico desde el período de William McKinley (1897-1901), en el primer caso, y a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en el segundo. También vimos cómo esa decisión tuvo un efecto incidental positivo («efecto culatazo» o «recoil effect»), que sirvió para hacer más representativos y responsables (*accountable*) a los gobiernos. En esa parte del trabajo queremos analizar empíricamente cuan bien fundamentada se encuentra esa creencia sobre el impacto de las políticas comunicacionales. Antes de entrar en la consideración de algunos datos o evidencias, es conveniente primero, sin embargo, tratar de rastrear las bases teóricas o conceptuales de dicha creencia.

El origen principal de esa creencia puede encontrarse, sin duda, en la llamada “teoría balística” o modelo de la “aguja hipodérmica” de la comunicación masiva. Esta es una concepción, como lo ha indicado Wilbur Schramm, de “caja negra” o estímulo-respuesta que atribuye una influencia persuasiva irresistible a los MCS: si un mensaje está bien diseñado y es atendido, su impacto de convicción sobre el público es directo e inmediato.

Esta concepción simplista de la influencia persuasiva de los MCS, surgida en el período de encumbramiento de líderes como Mussolini, Hitler y Huey Long y bendecida académicamente por la Escuela de Frankfurt desde finales de los años treinta, comenzó a ser desvirtuada en la siguiente década con los estudios empíricos pioneros de Paul Lazarsfeld y sus asociados en la Universidad Columbia. Sencillamente, entre la emisión de un mensaje y el comportamiento del público median una serie de procesos, el más importante de los cuales es el de la interpretación selectiva de la comunicación, que limitan grandemente el impacto persuasivo de los medios. (Koencke).

Pese a la reiterada desvirtuación empírica de ese modelo de “caja negra”, políticos, académicos y asesores de imagen, por razones que van desde la simple ignorancia hasta la muy

crematística del negocio de las asesorías, lo han mantenido vivo. Si a esto añadimos, como hemos visto, que los MCS son agentes importantes de la socialización política, que son asimismo factores de peso en la creación de la agenda y que también son proveedores de indicios para evaluar a los gobiernos, entonces no resulta extraño el énfasis que los gobernantes ponen en el diseño y ejecución de políticas comunicacionales.

Pero, ¿constituyen realmente las estrategias y programas comunicacionales de los gobiernos los factores que mejor explican las evaluaciones que se hacen de ellos entre el público? En forma creciente, la evidencia empírica revela que eso no es así. Resulta claro que un gobierno que adelante programas creíbles de comunicación estará en mejor posición para captar la adhesión de los ciudadanos que uno que no realice o ejecute esos programas. No obstante, es el desempeño del gobierno, especialmente en materia económica, y no lo que se publicita sobre dicho desempeño, lo que mejor explica su grado de aprobación por el pueblo.⁸

Veamos un ejemplo. En una serie de trabajos sobre la crisis de confianza en Estados Unidos, Lipset y Schneider (1983, 1987) encontraron que los niveles de confianza hacia distintas instituciones, incluida la presidencia, estaban fuertemente asociados con la marcha de la economía en el país y con la presencia o ausencia de crisis políticas. A partir de la guerra de Vietnam, la combinación de ciclos de recesión económica (1960-61, 1966-67, 1970, 1974-75, 1980, 1981-82) con diversos escándalos políticos (asesinatos de John F. Kennedy, de Robert Kennedy y de Martin Luther King; Watergate; perdón presidencial de Richard Nixon por Gerald Ford; crisis de los rehenes en Teherán durante el gobierno de Jimmy Carter), generó un clima de insatisfacción y cinismo que sólo cambió con la recuperación económica experimentada a

8. Es obvio que el desempeño económico de un país no depende únicamente de la política económica del gobierno. Hay otros factores objetivos que inciden en él, como la situación de los mercados internacionales y el desarrollo del sector privado dentro del mismo país. En el caso de Venezuela, sin embargo, el papel del Estado o del gobierno ha sido tradicionalmente elevado: en materia de comercio internacional, por ejemplo, las exportaciones realizadas por entes del Estado (hierro y petróleo) representaron 80% del total entre 1988 y 1992 (Rodríguez Mendoza: 184). Desde un punto de vista subjetivo, por lo demás, los venezolanos han tendido a esperar que sea el gobierno quien resuelva no sólo los principales problemas del país, sino también sus problemas de índole personal: 84% y 63%, respectivamente, a finales de los años setenta (O Connor: 61). Es preciso reconocer, no obstante lo anterior, que la presencia del sector público ha disminuido en el PIB: los ingresos del sector público consolidado como porcentaje de ese producto cayeron de un 57% en 1981 y en 1982 a un 23% en 1992 (Gerver Torres: 221).

partir de 1984 durante la primera presidencia de Ronald Reagan (Lipset y Schneider, 1987: 2). Este, no obstante ser conocido como el "Gran Comunicador"⁹, tuvo índices netos de desaprobación una vez concluida la llamada "luna de miel" hasta que la recuperación de la economía provocó una mejoría en el bienestar y satisfacción de los ciudadanos (Tabla VI). Esos niveles favorables de aprobación los perdió con el escándalo Irán-Contras, que se dio a conocer en noviembre de 1986 y que provocó debate e indignación pública en los primeros meses del año siguiente.

En Venezuela, la evidencia empírica revela también que el sentimiento de bienestar económico del ciudadano está estrechamente vinculado con las evaluaciones que él hace de la labor del gobierno. En las Tablas VII, VIII y IX se presentan las evaluaciones públicas de sucesivas administraciones en la década de los setenta, de los ochenta y de los noventa; la percepción de la situación económica personal actual en comparación con la del pasado; y la vinculación entre ambos tipos de evaluaciones.

Como se puede observar, en los juicios o evaluaciones se producen variaciones muy marcadas: el saldo neto de las evaluaciones de la labor de los distintos gobiernos oscila entre +17 (primer gobierno de Rafael Caldera) y -43 (segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez). En los saldos de la situación económica comparada también se observan grandes diferencias, con una variación similar de 60 puntos entre la puntuación mayor y menor: +10 (final del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez) y -50 (en septiembre de 1996, esto es, durante la actual segunda administración del Presidente Rafael Caldera). Al organizar en rangos o jerarquizar los dos tipos de evaluaciones, se observa una clara tendencia de covariación entre ellas: a mejor situación económica personal, tiende a expresarse una evaluación más favorable del gobierno (coeficiente de correlación de Spearman para datos ordinales $r_s=0,6$).

En virtud de que los datos empleados en las tablas anteriores no todos provienen de las mismas encuestas, alguien pudiera sentirse tentado a restarle validez a la interpretación ofrecida con el alegato de un posible efecto de instrumentación. En la Tabla X, sin embargo, utilizando

⁹ Durante la mayor parte de su vida, Ronald Reagan ha estado vinculado con el mundo del espectáculo y de las comunicaciones. Antes de convertirse en actor cinematográfico, fue "cheerleader" en la universidad y posteriormente locutor y narrador radial. Véase G. Wills.

datos de una misma encuesta ("Pulso Nacional", 3er, trimestre de 1983), se observan similares tendencias o resultados al examinar un gobierno, el de Luis Herrera Campins, hacia finales de su período. Así, en ella encontramos que entre las 1.800 personas que evaluaron su situación económica como peor que la del año precedente (60% de la muestra), 1.256 evaluaron negativamente al gobierno (70% de ese grupo); 132 lo evaluaron positivamente (7%); y 412 lo evaluaron en términos ni favorables ni desfavorables (23%). En contraste, entre las 240 personas que dijeron tener mejor situación económica que el año previo (8% de la muestra), 95 evaluaron positivamente al gobierno (40% de ese grupo), 73 lo juzgaron como regular (30%) y 72 lo evaluaron negativamente (30%). Finalmente, entre los 930 encuestados que señalaron que su situación económica era igual a la del pasado (31% de la muestra), 241 consideraron positiva la labor del gobierno (26%), 308 la juzgaron como regular (33%) y 381 la evaluaron desfavorablemente (41%).

La asociación monotónica positiva entre ambas variables es clara: en la medida en que la gente se siente económicamente mejor, mayor es la tendencia a evaluar favorablemente al gobierno.

No obstante la evidencia presentada, ¿no es posible encontrar excepciones en el sentido de que las políticas comunicacionales de un gobierno neutralicen el malestar económico del ciudadano para que le brinde apoyo decididamente? Muchas personas así lo creen y citan como ejemplo el gobierno de Jaime Lusinchi, quien tuvo al frente de la QCI a conocidos políticos y comunicadores sociales (Armando Durán, Clem Cohen, Alberto Federico Ravell, Ignacio Iribarren Borges, Carmelo Lauría, Carlos Croes y Domingo Viña) y a la cabeza de la empresa estatal de televisión (VTV) a la profesora de periodismo Marta Colomina. Especialmente a Carlos Croes se le ha señalado como el artífice de la presunta popularidad del gobierno lusinchista, tanto entre legos como entre especialistas en opinión pública.

¿Pero fue el de Jaime Lusinchi un gobierno realmente popular?

La respuesta a esa pregunta, como se desprende de la Tabla XI, es claramente negativa: sólo al final de su gestión tuvo ese gobierno un saldo de evaluaciones positivo (+7). Las mediciones de los primeros cuatro años, en contraste, realizadas en el último trimestre de cada uno de ellos, arrojaron saldos negativos: -22, -27, -27, y -13.

TABLA VI

Grado de satisfacción personal y evaluación popular de Ronald Reagan

| FECHA DE ENCUESTA | SALDO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN (1) | SALDO DE APROBACIÓN DEL PRESIDENTE (2) | |
|----------------------|---------------------------------------|---|--|
| Diciembre 81 | -40 | +8 | |
| Noviembre 82 | -48 | -4 | |
| Agosto 83 | -24 | -3 | |
| Diciembre 84 | +12 | +27 | |
| Noviembre 85 | +5 | +39 | |
| Junio 86 | +43 | +44 | |
| Diciembre 86 | - | +5 | |
| Enero 87 | - | +7 | • Irán - Contras: Se inician revelaciones en Noviembre, 1986 |
| Febrero 87 | - | -13 | |

Fuente: Encuestas nacionales Gallup y CBS/NYT (Lipset y Schneider, 1987; *Public Opinion* 10 (Sep. - Oct 1987).

(1) "En general, ¿está satisfecho con la marcha actual de las cosas en los Estados Unidos?". El saldo indica la diferencia entre satisfechos e insatisfechos.

(2) "¿Ud. aprueba o desaprueba la forma en que Ronald Reagan está desempeñándose en la Presidencia?". El saldo indica la diferencia entre aprobación y desaprobación.

TABLA VII

Evaluación de la labor del Gobierno

| | R. CALDERA 1973 (1) | C.A. PÉREZ 1978 (2) | L. HERRERA C. 1983 (3) | J. LUSINCHI 1988 (3) | C.A. PÉREZ 1993 (3) | R. CALDERA 1996 (4) |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| (BASE) | 1.521 | 2.304 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 804 |
| Positiva/Bien | 36 | 27 | 17 | 36 | 17 | 29 |
| Regular | 46 | 51 | 30 | 34 | 23 | - |
| Negativa/Mal | 19 | 23 | 53 | 29 | 60 | 70 |
| Saldo | +17 | +4 | -36 | +7 | -43 | -41 |
| (Posi-Neg) | | | | | | |

- (1) ¿Cómo evaluaría Ud. la labor del Presidente Caldera resolviendo los problemas nacionales durante los últimos 5 años?
- (2) ¿Cómo está actuando el Gobierno?
- (3) ¿Cómo calificaría la labor que el Gobierno actual está haciendo por Ud. personalmente?
- (4) Con la mayor sinceridad, pensando en las posibles cosas positivas y negativas, ¿Cómo diría Ud. que ha sido el actual gobierno para el país hasta ahora?

Fuentes: 1973 Baloyra (Torres,1989)

1978 Gallup GMO 34 (Torres, 1989)

1983: Datos: "Pulso Nacional", 4º trimestre

1988: Datos "Pulso Nacional", 4º trimestre

1993: Datos "Pulso Nacional", 1º trimestre

1996: Mercanálisis, agosto - septiembre (El Universal Septiembre 28, 1996, p1-14)

TABLA VIII

Situación económica actual con respecto al pasado

| | C.A. Pérez 1978 (1) | L.Herrera C. 1983 (1) | J. Lusinchi 1988 (1) | C.A. Pérez 1993 (1) | R. Caldera 1996 (2) |
|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| (BASE) | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 804 |
| Mejor | 33 | 13 | 23 | 24 | 8 |
| Igual | 44 | 44 | 35 | 31 | 33 |
| Peor | 23 | 43 | 42 | 45 | 58 |
| Saldo | +10 | -30 | -19 | -21 | -50 |

(Mejor - Peor)

- (1) Comparando su situación económica personal con la de hace un año, ¿diría usted que su situación es: mejor, igual, peor?
- (2) En los últimos seis meses, ¿su situación personal ha mejorado, empeorado o está igual?

Fuentes: 1978: Datos "Pulso Nacional" 4º Trimestre

1983: Datos "Pulso Nacional" 4º Trimestre

1988: Datos "Pulso Nacional" 4º Trimestre

1993: Datos "Pulso Nacional" 1º Trimestre

1996: Mercanálisis, agosto - septiembre (El Universal, Septiembre 29, 1996, p. 2 - 1)

TABLA IX

Relación entre bienestar personal y evaluación del Gobierno

| | Evaluación del Gobierno | | Situación Personal | |
|------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------|
| | SALDO NETO | RANGO | SALDO NETO | RANGO |
| Carlos A. Pérez (1978) | +4 | 2 | +10 | 1 |
| Luis Herrera C. (1983) | -36 | 3 | -30 | 4 |
| Jaime Lusinchi (1988) | +7 | 1 | -19 | 2 |
| Carlos A. Pérez (1993) | -43 | 5 | -21 | 3 |
| Rafael Caldera (1996) | -41 | 4 | -50 | 5 |

rs = 0,6

TABLA X

Situación económica personal y evaluación del gobierno de L.H.C.

LABOR DEL GOBIERNO

| SITUACIÓN ECONÓMICA | Hacia positiva | Ni+Ni- | Hacia Negativa | TOTAL |
|-----------------------|----------------|----------|----------------|--------------|
| Mejor que hace un año | 95 | 73 | 72 | 240 (8%) |
| Igual que hace un año | 241 | 308 | 381 | 930 (31%) |
| Peor que hace un año | 132 | 412 | 1.256 | 1.800 (60%) |
| Ns/Nc | 5 | 8 | 17 | 30 (1%) |
| TOTAL | 473 (16%) | 801(27%) | 1.726(57%) | 3.000 (100%) |

$\chi^2 = 374,2$ P<.001

Fuente: Datos, "Pulso Nacional", 3º Trimestre

TABLA XI

**Resultados económicos
y evaluaciones del gobierno de Jaime Lusinchi**

| | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| Saldo de Evaluaciones (Positiva - Negativa) | -22 | -27 | -27 | -13 | +7 |
| Cambio porcentual en demanda agregada | 0,1 | 17,4 | 44,7 | 36,8 | 40,3 |
| Tasa de desempleo | 12,95 | 13,06 | 11,02 | 9,15 | 7,32 |
| Reservas internacionales | | | | | |
| BCV (millones US\$) | 12.470 | 13.750 | 9.858 | 9.376 | 6.671 |
| Exportaciones totales (millones US\$) | 15.990 | 14.440 | 8.660 | 10.580 | 10.240 |
| Importaciones FOB | 7.250 | 7.500 | 7.870 | 8.870 | 12.080 |

Fuentes:

Datos: "Pulso Nacional", 4º Trimestres 1984 - 1988

Toro Hardy

BCV

Lo anterior significa que la mezcla de populismo y keynesianismo que caracterizó a esa administración rindió sus frutos, en términos de popularidad, hacia finales del periodo. Como lo señala Toro Hardy, pese a la declinación del ingreso petrolero en 1986, el gobierno se embarcó en una vigorosa etapa de expansión del gasto público, que alcanzó un promedio interanual de 38% y que produjo los mayores déficits fiscales conocidos en la historia del país hasta ese momento¹⁰. Esos déficits forzaron devaluaciones periódicas, endeudamiento interno y emisión inorgánica de dinero. La política fiscal expansiva estimuló un crecimiento interanual de la demanda agregada de 35% durante los últimos cuatro años de la gestión, lo que permitió reducir la tasa de desempleo de 13,06 en 1985 a 7,32 en 1988. El efecto de las medidas keynesianas sobre las reservas internacionales fue, como lo señala Toro Hardy, devastador: las mismas se contrajeron de 13.750 millones de dólares en 1985 a 6.671 millones en 1988 (Toro Hardy: 653). A ello debe sumársele el crecimiento constante de las importaciones, que pasaron de 7.250 millones de dólares en 1984 a 12.080 millones en 1988.

En fin, la política económica de demanda puesta al servicio de objetivos populistas logró, hacia el final del gobierno, una precaria y efímera popularidad suya, pero al costo de dañar sensiblemente al aparato productivo nacional y sin que la publicidad oficial tuviese mayor impacto en dicho "logro". En las palabras del periodista Leandro Cantó, "lo que hizo el gobierno de Lusinchi en los dos últimos años fue simplemente sacar dinero de los bolsillos privados para utilizarlo en el efectismo del crecimiento; al drenar recursos de la población vía el déficit, el endeudamiento y la devaluación fiscalista, la administración estaba disminuyendo la capacidad de producción e inversión de los entes privados de la economía, para redistribuirla entre aquellas actividades que con mayor rapidez pudieran arrojar cifras vendibles a la población económicamente inculta. Además de deshonesto, es un error económico de consecuencias inestimables" (Cantó: 53).

¹⁰ No es sólo en Venezuela donde los políticos se ven tentados por la opción fiscalista-populista de utilizar el déficit para provocar impactos de opinión pública. En EEUU, como lo reporta Dionne, los ciudadanos aborrecen los déficits, pero desean más y mejores servicios gubernamentales sin que aumenten los impuestos. En estas circunstancias, el déficit representa una alternativa peligrosamente tentadora por ser más expedita que la otra alternativa de buscar una mayor eficiencia en la administración pública, por ejemplo a través del recorte de la nómina burocrática.

II.3. Las "guerras sucias" en contra de los gobiernos como producto de los "fines inconfesables" de los MCS.

En la sección II.2 de este trabajo vimos cómo, pese a la interdependencia que existe entre los medios de comunicación, por un lado, y los políticos y gobernantes, por el otro, las relaciones entre ellos son tensas y se tornan a menudo conflictivas. La función de "perro guardián" que asumen los medios, aunada al criterio del "costo político" que tanta desazón genera entre dirigentes y gobernantes, se hallan, como vimos, detrás de los roces y enfrentamientos entre las dos partes.

Sin perder de vista esa dinámica, en esta sección abordaremos la tesis de que los MCS desatan en ciertas ocasiones "guerras sucias" en contra del gobierno para alcanzar fines egoístas o particulares. El énfasis se coloca aquí, obviamente, en lo que los gobernantes suelen denunciar como las motivaciones manipuladoras de los medios, las cuales irían desde un interés en la desestabilización del régimen hasta la simple escandalización orientada a incrementar los volúmenes de su público o audiencia. En síntesis, la función de enlace entre el ciudadano y las instituciones políticas tendría, según esta concepción, un fin bastardo que no se compadece con la idea de que los medios actúan como "perro guardián" de la sociedad.

Que los gobiernos acusan reiteradamente a los MCS es un hecho fácil de documentar. Menos fácil resulta, en cambio, demostrar la veracidad de las imputaciones que se les hacen a esos medios sobre los motivos perversos de sus críticas al gobierno.

En cuanto a lo primero, los alegatos gubernamentales han sido tan reiterados en el contexto norteamericano, por ejemplo, que un conocido profesor de ciencia política, Theodore Lowi, los ha convertido en colofón de una de las tres leyes que, según él, explican los fracasos en el ejercicio de la presidencia de su país a partir de la década de los sesenta. La primera de esas leyes, la Ley del Esfuerzo, con sus refinamientos, es enunciada de la siguiente manera:

a) Los Presidentes dedican la primera mitad de su período a tener éxito conforme a su toma de posesión y sus promesas.

b) Dedicar la segunda mitad de su período a crear la apariencia del éxito.

Refinamiento 1: La segunda mitad empieza cada vez más temprano.

Refinamiento 2: El comienzo de la segunda mitad se indica por quejas de la Casa Blanca sobre la mala prensa y por el empeño de la Casa Blanca para tapar grietas y para manejar la información (Lowi: 285).

Sin caer en el plano irónico del profesor Lowi, que está avalado por lo demás por abundante evidencia empírica o histórica, en Venezuela podemos llegar a una conclusión semejante sobre esa especie de mecanismo proyectivo utilizado por los gobiernos para imputarle mala fe a los MCS por sus denuncias y críticas. Veamos algunos casos:

Hacia mediados del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), el editor Jorge Olavarria se había convertido a través de su revista *Resumen* en el más acerbo crítico del régimen. La política económica del gobierno y los ministros de la economía eran los blancos principales de su reiterada crítica a estrategias macroeconómicas que consideraba contraproducentes y contradictorias. Los voceros del gobierno defendían, desde luego, la concepción y aplicación de dichas políticas y estrategias.

Esta contraposición de opiniones pronto cambió su cariz. A finales de 1977, Olavarria se había visto envuelto en un litigio civil relacionado con la partición de bienes en su proceso de divorcio. En contra suya se dictó en auto de detención el día 13 de diciembre, que representó para él el estar detenido durante 49 días en la Jefatura de San Juan y en la Cárcel Modelo. La televisora oficial le dio gran despliegue a este litigio de derecho privado y a la prisión del editor, quien fue además insultado en pintas o graffities que aparecieron simultáneamente en numerosos sitios de Caracas. En el número correspondiente al 2 de abril de 1978, Olavarria acusó al Ministro de Información y Turismo, Diego Arria, de haber utilizado jóvenes militantes de la seccional de Acción Democrática en La Vega para pintar los letreros en su contra (Pérez Vivas: 119-120).

De mayor relevancia aún –aunque menos inusual cuando se producen enfrentamientos entre los MCS y los gobernantes– fue el hecho de que algunos miembros y allegados del gobierno presionaron a los anunciantes de *Resumen* para que no hicieran más publicidad en la revista. Estas presiones y amedrentamiento de los anunciantes por el gobierno fueron denunciadas por Olavarria, lo que provocó una interpelación del Ministro de Información y Turismo en el Congreso. En el curso de la misma, el diputado Teodoro Petkoff le espetó al ministro lo siguiente:

"Y le advierto, yo digo como Eduardo Fernández, ni somos santos de la adoración de Olavarria ni él lo es de la nuestra, pero sencillamente se trata de un medio de comunicación que está ejerciendo un derecho y que está siendo víctima de lo que parece a todas luces la utilización de una circunstancia infortunada que vive el editor Olavarria, para silenciar el medio de comunicación o reducirlo, pues, a la impotencia" (Pérez Vivas: 118-119).

No ha sido el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, sin embargo, el que más se ha enfrentado y hostigado a los MCS durante los 39 años que tiene la democracia en Venezuela. Ese sitio le corresponde más bien, si nos atenemos a las denuncias que se han formulado públicamente desde 1984 hasta hoy, al gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989). Veamos algunas de las imputaciones que se le han hecho a dicha administración: 1) en los cinco años del período constitucional, "fue acusado por el gremio de periodistas de más de cincuenta violaciones a la libertad de expresión" (Sanín: A-4); 2) en ese periodo, también recibió "decenas de denuncias anuales de la Sociedad Interamericana de Prensa" (Tarre de Lara: 8); 3) se le atribuye haber ordenado la golpiza que desconocidos propinaron al columnista Alfredo Tarre Murzi, conocido como "Sanín" (Tarre de Lara); 4) se le sindica de haber entregado grandes sumas de dinero a dos editores para neutralizarlos como posibles críticos del gobierno (de la Cerdá: 6); 5) se le acusa de haber realizado "encuestas" sesgadas en los canales televisivos del Estado para desacreditar al dirigente y excandidato presidencial de AD Luis Píñerúa Ordaz (Díaz Rangel: 15; García Ponce: 69) así como también a empresarios del sector cauchero del país (*El Nacional*, agosto 27, 1988); 6) se le acusa, en fin, de haber manipulado, a través de la oficina del Régimen de Cambio Diferencial, la entrega de divisas a editores y propietarios de MCS para obligarlos a silenciar sus críticas al desempeño gubernamental. (Whaite, citado por Sanchís: 50)

Como podría esperarse, el gobierno se afanó en tratar de desmentir esas imputaciones y acusaciones y de presentarlas, por el contrario, como expresiones del "interés perverso" de los medios en desacreditar a la administración. El propio Presidente de la República, en una entrevista televisiva con una reportera que tuvo vínculos cercanos con el gobierno, se extendió de la siguiente manera sobre el asunto al ser interrogado sobre las críticas formuladas en contra de su gobierno:

"Creo que la libertad de expresión es una conquista de nuestro pueblo que nadie puede vulnerar sin atentar contra los intereses profundos de este pueblo. Esa es otra conseja que han inventado en forma interesada. Por ejemplo, un programa muy prestigioso de la televisión fue suspendido porque lo suspendió quién lo protagoniza en función de propias determinantes; ignoro qué pasó o qué problemas tuvo... Hubo otro caso de una distinguida periodista que tenía un problema que no comentó... A otro señor por allá le dieron un susto unos atracadores, supongo yo; y entonces él inventa una agresión. Cuestión de miedos quizá, porque no veo para qué alguien iba a promoverla en su caso" (Dávila: 14)

La administración reciente del Dr. Caldera (1994-1999) no ha estado exenta de ese tipo de enfrentamientos con los MCS. Muy recientemente, de acuerdo con uno de los más destacados columnistas del país, el jefe de la OCI declaró que las acusaciones formuladas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en contra del gobierno constituían una maniobra fraguada "aquellos señores de los medios para golpear al gobierno por mampuesto en un país donde existe total libertad de expresión" (Peña: D-2). No da cuenta el columnista de las razones que pudieran tener los medios, según la OCI, para la supuesta maniobra de descrédito gubernamental.

¿Qué dijo la SIP sobre la administración del Presidente Caldera y cuáles pruebas ha presentado para haberlo dicho?

En su última reunión semestral, realizada en Ciudad de Panamá durante la segunda quincena de marzo del presente año, la SIP denunció que en Venezuela existían claras amenazas en contra de la libertad de información. El pronunciamiento se produjo luego de que los asambleístas conocieron y analizaron un informe presentado por los miembros del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), que recogía diferentes indicios sobre lo que sus voceros consideran como amenazas. El informe cita, en primer lugar, la falta de decisión por la Corte Suprema de Justicia en torno a una demanda de nulidad introducida por el BPV en contra de la Ley de Ejercicio del Periodismo. Los demandantes introdujeron este recurso por considerar que, al establecer la obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del periodismo escrito, la ley establece discriminaciones que son inconstitucionales. (*El Universal*, marzo 19, 1997). En segundo lugar, el informe señala que el gobierno venezolano intenta aprobar una ley de prensa, enmascarada como un código de ética, que pretende imponerle como obligación a los medios,

la información "justa y veraz". Este tipo de información, según alegan, si uno se atiene a las palabras pronunciadas por el Presidente Caldera en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado celebrada en Chile, sería aquella transmitida de manera "leal". Con justificada suspicacia, los voceros del BPV se han preguntado qué debe entenderse por "leal" y hacia quién debe dirigirse esa lealtad (*El Universal*, marzo 17, 1997). Un tercer indicio, de acuerdo con la SIP, son una serie de decisiones judiciales, entre las cuales destaca la que condenó a prisión al periodista William Ojeda por haber escrito un libro sobre la corrupción de jueces y de tribunales. Finalmente, el informe hace referencia a la "exhortación hecha por el Ministro de CORDIPLAN, Teodoro Petkoff, ante un grupo de empresarios a utilizar su poder como anunciantes para influir en la línea editorial de los medios" (*El Universal*, marzo 17, 1997). Esta posición actual el Ministro Petkoff contrasta radicalmente, como vimos al hacer alusión a las relaciones de primer gobierno de Carlos Andrés Pérez con los MCS, con la que adoptó en esa época como diputado, cuando fustigó duramente al Ministro de Información y Turismo del momento por haberse supuestamente valido de su poder para desacreditar, tratar de llevar a la quiebra y eventualmente silenciar al editor Jorge Olavarria y a su revista *Resumen*.¹¹

11 Antes de ser nombrado ministro por el Presidente Caldera, Teodoro Petkoff había sido duro adversario de los MCS y especialmente de la TV. Sus razones críticas de entonces parecían, sin embargo, diferentes a las de ahora. Hacia finales de década pasada, por ejemplo, atribuía a la televisión un marcado impacto en la criminalidad juvenil y abogaba por una estrategia que, más allá de lo represivo, pusiera énfasis a lo que, según él, son las fuentes promotoras de ese tipo de delincuencia, especialmente cierta programación televisiva (Petkoff, 1989: 1-4). Más recientemente insistiendo sobre el tema y refiriéndose a los empresarios de la TV, señaló: "ya no se puede continuar permitiendo a una gente que, con impudicia monstruosa, planifica friamente operativos de embrotecimiento e imbecilización colectivos... y ya no se puede continuar con la ingenuidad de pedirles que se autoregulen ellos por su cuenta"... (Petkoff, 1995: 1-4). Si la autorregulación está descartada, ¿quién deben entonces regular a los MCS? Una opción es incrementar el papel regulador que el gobierno ejerce en la actualidad, partiendo de la premisa de que los funcionarios gubernamentales saben mejor que nadie lo que le conviene al público. Dentro de esta tradición se enmarca la actuación de los censores de la primera administración Caldera, que prohibieron la proyección en el país del film "El último tango en París". Otra opción es la promovida por un profesor de filosofía, alto funcionario de la UNESCO durante la cuestionada gestión de Aníbal Mahter MBow de crear un comité de expertos para decidir la programación de los MCS (Associated Press). La última opción elitista es la de poner en manos de los anunciantes, gracias al poder de presión que les otorga su patrocinio publicitario, la decisión sobre lo aceptable e inaceptable en materia de programación. En contraste con las opciones elitistas anteriores, la opción pluralista confiere al público la última palabra sobre lo que debe transmitirse u ofrecerse. Esta opción choza, empero, con el sentimiento de superioridad moral e intelectual de quienes adversan mecanismos de abajo hacia arriba como el "rating" y la elección uninominal de los representantes a cargos de elección popular.

III.4. Los MCS y su invasión de la vida privada de las figuras públicas para escandalizar y hacer dinero.

Esta tesis, enarbolada frecuentemente por políticos y gobernantes en todas partes del mundo, se parece a la analizada en la sección anterior, con la salvedad de que, en el presente caso, la "motivación perversa" de los medios se presume dirigida a escarnecer no a la institución del gobierno como tal, sino a personalidades individuales del sector político.

Los alegatos sobre la vocación escandalizadora de la prensa tienen larga data. A William Randolph Hearst, por ejemplo, ya desde finales de siglo pasado se le acusaba en Estados Unidos de ser el gran instigador del "amarillismo" a través de sus periódicos de San Francisco, Chicago, Boston, y Nueva York¹². Desde esa época, la tendencia de ciertos MCS a invadir la vida privada de las figuras públicas, incluidos políticos, ha sido claramente documentada. Así, en tiempos muy recientes las noticias sobre las infidelidades conyugales de los herederos al trono británico resultaron tan reiteradas, que la Reina Isabel proclamó haber vivido su "año horrible".

¿Están siempre las críticas personales a gobernantes y políticos motivadas por un afán escandalizador de los medios? ¿Deben esas críticas ser siempre repudiadas?

Las respuestas a estas dos interrogantes son necesariamente negativas. Pese a las afirmaciones de políticos que se sienten agraviados, las denuncias que, en términos personales, realizan los MCS están usualmente motivadas por el papel que ellos asumen como "perro guardián" de la sociedad y como intermediarios entre el público y los actores políticos y gubernamentales. Imputar motivos constituye, desde luego, una cuestión riesgosa, ya que los mismos no son visibles o verificables directamente, sino que deben ser inferidos del comportamiento. Por ello, cuando un medio al denunciar se expone a la ira y retaliación de funcionarios encumbrados, en lugar de adoptar posiciones cómodas o complacientes ante los poderosos, se puede presumir que actúa en función del interés de los ciudadanos, de la sociedad

12 William Hearst combinó su rol de editor con el de político, ya que fue miembro de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano durante dos períodos y aspirante derrotado a la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York y a la Gobernación del Estado de Nueva York. Estos dos fracasos electorales revelan, por cierto, que, pese al lugar común, el poder de los medios no conduce inevitablemente al poder político.

y no del suyo propio. Las denuncias del *Washington Post* en contra de altos funcionarios involucrados en el caso Watergate, incluido el Presidente Nixon, constituye un ejemplo de ese tipo de inferencia. En Venezuela, las denuncias en contra actores gubernamentales de primer rango por estar envueltos en casos de corrupción como RECAIDI y la compra y entrega irregular de vehículos rústicos con dinero de una partida secreta (en un período en el cual el régimen de control cambiario facilitaba la retaliación oficial) representan también buenos ejemplos.

Al responder como respondimos la primera pregunta se nos hace obvia la respuesta general a la segunda. Las críticas personales que formulan los medios a los políticos y gobernantes son repudiables cuando con ellas no se persigue corregir o prevenir una situación lesiva al interés de la sociedad, sino generar un escándalo capaz de atraer la curiosidad o el interés de los ciudadanos sobre el mismo. En este caso, el fin ulterior de la denuncia suele ser pecuniario: al incrementar la circulación del periódico o la sintonía radial o televisiva, tienden a elevarse las ganancias del medio.

No obstante existir esa posibilidad y de tomar cuerpo en los hechos pienso que, dada la capacidad retaliativa de políticos y gobernantes -en términos económicos, judiciales y represivos- esos ataques personales injustificados tienden a ser los menos frecuentes de todos. Lo cual quiere decir, en mi opinión, que las críticas personales a los hombres públicos pueden por lo general considerarse justificadas.

En un reciente trabajo sobre las llamadas "campañas electorales negativas", el profesor estadounidense William Mayer identifica una serie de situaciones en las que, según él, se justifica plenamente ese tipo de campaña. Esos mismos criterios pueden, a mi entender, ser aplicados para diferenciar las críticas personales razonables o aceptables de las que no lo son, en contextos diferentes a los de una campaña electoral.

En términos concretos, por lo tanto, una crítica de tipo personal se justifica, primeramente, cuando el comportamiento de un político o funcionario gubernamental ocasiona un daño a la colectividad y existe el riesgo de que, si los medios no denuncian, dicho daño se repita o perpetúe. La utilización de bienes públicos con fines privados por un funcionario es un caso en punto, tal como aconteció recientemente en el país con el uso reiterado, con fines recreacionales, de los aviones de la empresa estatal PDVSA por Ministros, altos funcionarios gubernamentales

y sus amigos y familiares. La denuncia de los MCS generó un escándalo, promovió interpelaciones parlamentarias y, presumiblemente, puso fin al aprovechamiento indebido de esos bienes de la Nación.

El ejemplo citado no es, en realidad, sino un tipo específico del fenómeno más amplio de la corrupción administrativa, cuyo freno más importante en muchos países, incluido Venezuela, está representado por el temor a la denuncia de los medios. En un reciente artículo sobre la extensión internacional del fenómeno, Moisés Naim atribuye a la vigencia creciente del periodismo investigativo la proliferación de escándalos de corrupción. Este estilo reportero habría generado, en sus palabras, una verdadera "enización de la corrupción".

La crítica o la divulgación de aspectos de la vida privada de los políticos también se justifica, siguiendo a Mayer, cuando ella devela la características personales indeseables que hacen probables un fracaso de dichos políticos de llegar a obtener un cargo de responsabilidad en el gobierno. Como con acierto lo señala ese autor, los políticos suelen hacer promesas que no están dispuestos a cumplir o que, simplemente, consideran que serán eventualmente olvidadas. Otras veces prometen de buena fe decisiones y acciones de poca viabilidad, que deben ser descartadas una vez alcanzado el poder. Lo importante, en cualquier caso, es que las ofertas y promesas de los políticos resultan con mucha frecuencia desechables o efímeras. En contraste, ciertas dimensiones de su personalidad son no sólo persistentes a lo largo de tiempo, sino también indicadores de su probable comportamiento ante determinadas circunstancias o situaciones. El carácter, en concreto, constituye un conjunto de rasgos personales que determina la mayor porción del comportamiento básico de una persona (Young: 26).

Una creciente literatura en el área de personalidad y política atribuye poder predictivo del comportamiento de líderes a distintos modelos characterológicos. James Barber, por ejemplo, basado en su tipología de carácter presidencial, pronosticó en el ya lejano año 1972 que si un presidente activo-negativo como Richard Nixon resultaba reelecto para un segundo periodo, la probabilidad de que se viera envuelto en una gran crisis constitucional y política era bastante elevada. Nixon, como se sabe, fue reelecto ese año y debió renunciar en 1974 como consecuencia del cataclismo político y social que representó Watergate.

En contraste con ese caso, en el cual la advertencia barberiana no tuvo ningún efecto práctico, la puesta en evidencia de debilidades caracterológicas en un líder si ha servido en otras ocasiones para impedir su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos. La divulgación del comportamiento temeroso y contradictorio de Ted Kennedy en el accidente automovilístico de Chappaquiddick, en el cual perdió la vida una joven secretaria, constituye un ejemplo claro de lo señalado. Más recientemente, las escapadas románticas de Gary Hart con una modelo aunadas a su tendencia a "quitarse la edad", al ser divulgadas por los medios contribuyeron a frustrar su aspiración candidatural por el Partido Demócrata en 1988. Ese mismo año, otro pre-candidato demócrata, el senador Joseph Biden, tampoco pudo obtener la postulación de su partido cuando los medios pusieron de manifiesto su tendencia a plagiar discursos de otros y a mentir acerca de sus credenciales o antecedentes académicos (Young; Buckley).

No considero necesario explayarme más sobre este punto. Finalizó esta sección señalando que, si bien la vida privada de funcionarios públicos es a veces escrutada y divulgada innecesariamente, en muchas otras ocasiones ese examen y divulgación sirven para frenar excesos y para evitar males futuros. La línea divisoria entre ambos casos no es siempre fácil de identificar. Por fortuna, en las democracias eficaces, tienden a existir los correctivos necesarios para limitar y resarcir los agravios injustificados, pero también los mecanismos para frenar la apetencia de políticos que han sido justificadamente puesto en entredicho.

Conclusión

En una democracia, los MCS asumen voluntariamente su papel de "perro guardián" de la sociedad; en un sistema totalitario, en contraste, constituyen instrumentos al servicio de los intereses del régimen.

En uno y otro caso, los medios actúan como enlaces entre gobernantes y gobernados. Ese enlace en una democracia es pluralista y se concreta en flujos comunicacionales que parten tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. En un régimen totalitario, en cambio, el enlace

tiende a ser restringido y unidireccional: las comunicaciones fluyen abrumadoramente de arriba hacia abajo.

En este trabajo nos limitamos a un análisis de esos dos papeles o funciones globales que cumplen los medios de comunicación en sistemas democráticos. Si bien analíticamente los procesos envueltos en tales funciones pueden ser separados, en la práctica ellos se encuentran estrechamente vinculados. La función socializadora de los medios, por ejemplo, puede concretarse en la sensibilización de un electorado sobre la inconveniencia de sufragar por un candidato iracundo, mentiroso, voluble, compulsivo o negligente.

A parte de las funciones señaladas los MCS en una democracia persiguen otra finalidades. Una de ellas es la de generar beneficios económicos o utilidades para sus propietarios. Como al logro de este fin se supedita a veces cualquier otra consideración, resulta posible encontrar entonces medios que, efectivamente, como lo señalan algunos políticos, escandalizan por motivos puramente egoístas, de carácter lucrativo.

Pienso que esos medios que se dirigen al segmento del público que muestra mayor avidez por el escándalo (económico, policial, político, sexual) se encuentran en minoría. Simplemente, como lo revela la evidencia empírica, los MCS son las instituciones que, junto con la iglesia, las universidades y las Fuerzas Armadas, gozan de mayor confianza entre los venezolanos (Zapata: 179). Dañar esa confianza, perder su credibilidad por un simple afán escandalizador, resulta sencillamente un mal negocio para ellos.

Referencias

- A. ALBERTI Y A. SILVA. *Los medios de comunicación y la piñata electoral.* *Summa*, N° 68, marzo 28, 1973.
- A. ALVAREZ. *Noticias de sucesos, versiones y manipulaciones. Qué hizo quién y porqué el 27 de febrero según prensa*", *Politeia* 13, 1989.
- ASSOCIATED PRESS. *Soviets schemed to hijack olympics using UNESCO.* *Daily Journal*, diciembre 29, 1987
- E. BALOYRA. "Public opinion and support for the regime: 1973-1993". En J.D. Martz y D. Myers (Ed.) *Venezuela. The Democratic Experience*, NY: Praeger, 1986.
- J.D BARBER. *The Presidential Character. Predicting Performance in the White House.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.
- BCV. *Informe Económico*. Varios años.
- L. CANTÓ. *Los Años del Gatopardo. La Saga de Jaime Lusinchi*. Caracas: Ediciones Certum, sf
- R. CAPRILES (ed.) *Diccionario de la Corrupción en Venezuela*. Caracas: Consorcio Editorial Capriles, 1992. 3 volúmenes.
- B. COHEN. *The Press, the Public and Foreign Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963.
- M. GROTTY. *Murphy would probably also win the election. The effect of television as related to the portrayal of the family in situation comedies.* *Journal of Popular Culture* 29, invierno 1995.
- DATANÁLISIS, C.A. "Flash de opinión sobre el 27 de febrero". Caracas, marzo, 1989.
- DATOS, C.A. "Pulso Nacional", diversos años.
- M. DÁVILA. "Entrevista al Presidente de la República, Dr. Jaime Lusinchi, para El Informador" *Últimas Noticias*, septiembre 18, 1988.

- D. DAVIS. *The Five Myths of Television Power. Or Why the Medium is not the Message*. NY: Simon and Schuster, 1993.
- R. DAWSON ET. AL. *Political Socialization*. Boston: Little, Brown, and Co., 1997. 2^a edición.
- E. DE LA CERDA. *Clip. El Mundo*, septiembre 13, 1989
- E. DÍAZ RANGEL. *Los cagatintas. Elite 3275*, septiembre 9, 1988.
- J. DIONNE. *How to win elections: Don't cut the deficits*. The New York Times, noviembre 19, 1987, p. 28.
- DOXA, Instituto de Opinión Pública, C.A. *Estudio Mundial de Valores*, segmento venezolano, 1996.
- G. GARCÍA PONCE. *Desinformación y manipulación en el 8*. *Últimas Noticias*, septiembre 6, 1988.
- J.A. GIL YEPES. *Los empresarios deben ser actores políticos*. *El Diario de Caracas*, julio 12, 1989
- D. GRABER. *Mass Media and American Politics*. Washington D.C. : Congressional Quarterly Press 1959.
- R. HESS Y J TORNEY. *The Development of Political Attitudes in Children*. Chicago: Aldine, 1967.
- H. HYMAN. *Political Socialization*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1959.
- S. IYENGAR Y D. KINDER. *News that Matters*. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.
- L.R. JACOBS. *The recoil effect: Public opinion and policy making in the US and Britain*. Comparative Politics, enero, 1992.
- H. KOENEKE. *La publicidad electoral: ¿potencia o impotencia de las imágenes políticas*. Argos 18, 1994.
- S. LIPSET Y W. SCHNEIDER. *The Confidence Gap. Business, Labor and Government in the Public Mind*. NY: The Free Press, 1983.
- S. LIPSET Y W. SCHNEIDER. *The confidence gap during the Reagan years*. *Political Science Quarterly* 102, primavera , 1987.

- T. LOWI. *El Presidente Personal*. México: FCF, 1993.
- J. MANHEIM Y R. ALBRITTON. *Changing national images: International public relations and media agenda setting*. APSR 78, 1984.
- M. MCCOMBS Y D. SHAW. *The agenda-setting function of mass media*. Public Opinion Quarterly 36, verano, 1972.
- J.A. MAYOBRE. *La Labor de Sísifo*. Caracas: Monte Avila, 1993.
- MERCANÁLISIS. *Estudios de opinión pública*. El Universal, septiembre 28 y 29, 1996.
- M. MONTERO. *Ideología, Alienación e Identidad Nacional*. Caracas: UCV, 1984.
- W.G. MAYER. *In defense of negative campaigning*. Political Science Quarterly III, 1996.
- M. NAIM. *The corruption eruption*. The Brown Journal of World Affairs 2, 1995.
- R. O'CONNOR. *The electorate*. En H. Penniman (De). *Venezuela at the Polls. The National Election of 1978*, Washington, D.C.: AEI, 1980.
- A. PEÑA. *Conversaciones*. El Nacional, marzo 21, 1997.
- P.J. PÉREZ Vivas. "Caso Resumen". Comunicación 19-20, octubre, 1987.
- T. PETKOFF. *El corazón en las tinieblas*. El Universal, agosto II, 1989.
- T. PETKOFF. *La TV en la picota*. El Universal, mayo 5, 1995.
- PUBLIC OPINION 10 Sept-Oct. 1987.
- MARÍA P. QUINTERO. *Enseñanza de la historia y construcción de identidad: El caso de Venezuela 1944-1992*. En D. Mato (Coordinador) *Diversidad Cultural y Construcción de Identidad*. Caracas: Fondo Editorial Trópykos, 1993.
- N. RONDÓN NUCETE. *Cada día se informa menos y se gasta más*. El Diario de Caracas, junio 28, 1989.
- P. RODRÍGUEZ. "Relación entre escándalo gubernamental y la impopularidad presidencial. Caso Carlos Andrés Pérez, 1989-1993". Trabajo de grado, Maestría en Ciencia Política, USB, 1995.

- M. RODRÍGUEZ MENDOZA. "Apertura económica e integración en América Latina. La estrategia de Venezuela". En C. Blanco (Coordinador) *Venezuela, del Siglo XX al Siglo XXI*. Caracas: COPRE/Nueva Sociedad, 1993.
- A. ROMERO. "Rearranging the deck chairs on the Titanic. The agony of democracy in Venezuela". Trabajo presentado en la reunión anual de LASA, Washington, septiembre, 1995.
- C.T. SANCHÍS. "Vinculación entre el prestigio del Presidente y el de la prensa: Caso Carlos Andrés Pérez, 1989-1993. Trabajo de Grado Maestría en Ciencia Política, USB, 1997.
- SANÍN. *El colmo de Lusinchi*. El Nacional, marzo, 1997.
- E. SANTORO. *La TV Venezolana y la Formación de Estereotipos en el Niño*. Caracas: UCV, 1969.
- W. SCHRAMM. "The nature of communication between humans". En W. Schramm y D. Roberts (Ed) *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana, Ill: University of Illinois Press, 1974.
- M. TARRE DE LARA. *Un viejo decrépito*. El Diario de Caracas, septiembre 16, 1988.
- A. TEMPLETON. *The evolution of popular opinion*. En L. Goodman et.al. *Lessons of the Venezuelan Experience*. Washigton: The Woodrow Wilson Center, 1995.
- J. TORO HARDY. *Fundamentos de Teoría Económica*. Caracas: Editorial Panapo, 1993.
- A. TORRES *Evaluaciones de los Gobiernos democráticos (periodos de prosperidad y de crisis)*. En CSE. Partido Electoral, Programas de Gobierno y Clases Políticas. Caracas: Colección Cincuentenario del CSE, 1989.
- A. TORRES Y C. CODETTA. *La opinión pública sobre el 27 de febrero*. Caracas: mimeo, 1989.
- GERVER TORRES. *La economía que podemos construir*, En C. Blanco, Op. Cit.
- M. URDÁNETA. PETKOFF: *La proposición es una grosería*. El Diario de Caracas, mayo 21,1988.
- D. WEAVER. *What voters learn from media*. Annals, AAPSS 546, julio, 1996.
- F. WHAITE. *Situación de los derechos humanos en Venezuela, libertad de expresión e información*. Comunicación_70, 1990.

- G. WILLS. *A fantasy breeds a scandal.* Time, enero 5, 1987.
- P. YOUNG. *Presidential pecadillos.* Psychology Today, marzo, 1988.
- R. ZAPATA. *Valores del Venezolano.* Caracas: Conciencia 21, 1996.
- L. ZUCKERMAN. *Full democracy, semi-outrage.* Time, junio 22, 1987.